Construyendo valores democráticos a través de los derechos humanos

La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. En este contexto, la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional.

Conferencia Mundial de Derechos Humanos,
1993: A8

Uno de los desafíos para alcanzar una democracia incluyente y el desarrollo humano sostenible en Honduras pasa, sin lugar a dudas, por la vigencia y apropiación del Estado y de la sociedad de los derechos humanos.

El desarrollo humano, la democracia y los derechos humanos comparten una misma motivación fundamental: proteger y ampliar las libertades del ser humano, entendidas éstas en su sentido más amplio. Dentro de esta orientación, el presente capítulo pretende enfocarse en la democratización y en el desarrollo del país a través de una mirada al proceso de institucionalización, socialización y cumplimiento de los derechos humanos, centrándose especialmente en realizar una primera aproximación a los llamados “derechos de la segunda generación”, los derechos económicos, sociales y culturales. El capítulo también hace un breve acercamiento con la perspectiva de visualizar si los derechos humanos realmente son un valor dentro de la democracia hondureña.

En Honduras, durante los últimos veinte años se han dado pasos cruciales para intentar garantizar la primera generación de derechos humanos, es decir, los derechos civiles y políticos, que incluyen, entre otros, derechos a la vida, a la propiedad, al sufragio, a un nombre y a una nacionalidad, y libertad de religión de asociación y de opinión. Estos derechos ya han sido reconocidos jurídicamente en el país, aunque falta aún trabajo que hacer para que las instituciones públicas realmente garanticen estos derechos.

Por otra parte, con la Constitución de 1982 se logró un importante reconocimiento de los derechos de la segunda generación, que comprende los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Pero estos derechos de la segunda generación aún no han sido desarrollados de manera suficiente en las leyes secundarias ni se han traducido en políticas y programas integrales del Estado para protegerlos y garantizarlos plenamente. A nivel mundial, se reconoce también la existencia de una tercera generación de derechos humanos: los derechos colectivos o de la solidaridad, incluyendo, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano y el uso de los avances de las ciencias y la tecnología. Sobre estos últimos, los adelantos en el país son todavía más limitados (véase el recuadro 5.1).

Si bien las relaciones mutuamente complementarias entre el desarrollo, la democracia y los derechos humanos se conocían hace mucho tiempo, en la última década éstas han sido sujeto de un mayor énfasis mundial. La vinculación entre los derechos y el desarrollo humano se analizó y profundizó en el *Informe mundial sobre Desarrollo Humano 2000* del PNUD. Según este análisis, los derechos humanos son a la vez el fin del desarrollo humano y un medio. En el primer sentido, el desarrollo humano se puede concebir como el medio para el goce de los derechos humanos. El propósito del desarrollo humano, como proceso de ampliar las opciones de la gente, es precisamente permitirles a todos vivir en condiciones de dignidad humana o, en otros términos, la plena satisfacción de todos los derechos humanos, incluyendo la salud, la educación, las condiciones de trabajo satisfactorias, un medioambiente saludable, la igualdad y los demás derechos económicos, sociales y culturales.

En el segundo aspecto, concebir los derechos humanos como medio para el desarrollo humano, destaca que la promoción y la protección de los derechos humanos es necesaria en la capacitación de los individuos para que participen como sujetos de su propio desarrollo. Cuando las personas se encuentran en una situación de alta precariedad con respecto a sus derechos económicos sociales y culturales -sin acceso a los servicios médicos, sin educación, en situaciones laborales precarias, con la

RECUADRO 5.1

Libertad, igualdad, solidaridad: las generaciones de los derechos humanos

La primera generación: Los derechos de la libertad. La primera generación recoge los derechos civiles y políticos y se desarrolla en Europa y América entre los siglos XVIII y XIX, con la Ilustración, las revoluciones burguesas las guerras de independencia. La Declaración de Derechos de Virginia (1776) establece que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen derechos innatos. El artículo 1 de la Declaración parisina de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) proclama que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.

Los derechos de la primera generación son derechos individuales, civiles y políticos, que exigen respeto a la dignidad de la persona, su integridad física, autonomía y libertad frente a los poderes constituidos y garantías procesales. Estos derechos tienen como soporte las teorías del contrato social, el jusnaturalismo racionalista, la filosofía de la Ilustración. El impulso del liberalismo progresista plasmó la declaración de estos derechos en los preámbulos de las constituciones de los Estados nacionales durante el siglo XIX, favoreciendo así la extensión de los derechos civiles y políticos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, compendia estos derechos.

La segunda generación: Los derechos de la igualdad. Si los derechos de la primera generación protegen al individuo frente al Estado, ahora se exigirá cierta intervención del Estado para garantizar a los individuos los bienes sociales básicos como la educación, la salud, el trabajo y la protección social. Estos derechos defienden unas condiciones sociales tales que realmente hagan posible a todas y cada una de las personas disfrutar de los derechos de la primera generación. Las realidades sociales concretas impiden poner en práctica las declaraciones de derechos liberales. No es verdad que todos los hombres nacen iguales en derechos y libres; más bien ocurría y ocurre lo contrario: Las situaciones de partida son radicalmente desiguales, y declarar en el campo teórico e ideal la igualdad puede ser una estrategia para mantener de hecho reales desigualdades.

La progresiva realización de la democracia política, la ampliación del sufragio y reformismo social del siglo XIX permitieron al constitucionalismo liberal poder encajar los derechos económicos y sociales. Estos derechos son una conquista del movimiento obrero, la nueva clase emergente con el desarrollo de la sociedad industrial. La revolución bolchevique de 1917 también representó un factor determinante. Las constituciones posteriores van introduciendo progresivamente el derecho a la educación, al trabajo, etc. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, compendia estos derechos.

La tercera generación: Los derechos de la solidaridad. Después de la primera generación de los derechos civiles y políticos, propios del constitucionalismo liberal y de los derechos sociales y económicos de la segunda generación, surge en la segunda mitad del siglo XX una tercera generación de derechos, que podemos calificar como derechos de la solidaridad. Estos derechos se configuran como declaraciones "sectoriales", por cuanto son derechos de personas concretas, pertenecientes a determinados colectivos, que se ven discriminados o privados en determinados derechos. Desde las últimas décadas del siglo XX estos derechos de la solidaridad se profundizan y amplían, demandando la solidaridad entre países ricos y pobres y la superación de las desigualdades Norte-Sur; la solidaridad con la naturaleza, exigiendo la protección del medio ambiente; la solidaridad con las culturas y generaciones, reclamando respeto al patrimonio cultural.

Fuente: García, 1999: 137-139.

falta de un ingreso mínimo, con un medio ambiente deteriorado, etc. será muy difícil que mejoren sus vidas y contribuyan al mayor desarrollo humano. Usar los mecanismos de derecho para garantizar el acceso seguro a estas condiciones mínimas de vida representan una inversión en la capacidad humana necesaria para lograr el desarrollo humano sostenible.

Desde la relación del paradigma del desarrollo humano con la teoría de los derechos humanos, la democracia es una condición necesaria, pero no suficiente, para la garantía de todas las categorías de derechos. Una debilidad que caracteriza muchas democracias es el menoscabar los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) Si bien los

derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales son igualmente importantes para lograr el desarrollo humano, estos últimos suelen ocupar un lugar marginal en el discurso y en la práctica de los derechos humanos, pues muchas veces se refiere sólo a los derechos civiles y políticos, pese a que los DESC son un componente indispensable del desarrollo democrático.

La recuperación democrática y el reconocimiento de los derechos humanos

Aún cuando Honduras no experimentó directamente las guerras civiles internas que sacudieron a

sus tres países vecinos durante las décadas de los setenta y ochenta, de todas maneras fue el escenario de retaguardia de varios ejércitos y, a su vez, fue receptor de varios miles de refugiados de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Como resultado de estos y otros fenómenos internos, el país vivió un intenso proceso de militarización durante los años finales de los setenta y la primera mitad de los ochenta. Aunque en menor proporción que en los otros países vecinos, el país sufrió también, en nombre de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la constante violación de los derechos civiles y políticos de su población. De manera que, especialmente entre el período 1981-1985, se volvieron comunes los incidentes de detención ilegal, tortura, desapariciones forzadas y ejecución arbitraria en perjuicio de las personas.

Mientras ocurría esta violación sistemática a los derechos fundamentales, el gobierno de Honduras, y especialmente el poder judicial, fueron incapaces de investigar y sancionar estas prácticas, al grado que los propios recursos judiciales como el *Habeas Corpus* fueron desatendidos generalmente por la negligencia del poder judicial y por la presión ejercida por las fuerzas militares. Con el fin de la guerra fría a finales de los ochenta y, además, por la presión creciente que ejercieron los emergentes organismos de derechos humanos, la situación pudo irse revirtiendo hasta crear una institucionalidad mínima de protección de los derechos civiles y políticos, así como el desarrollo de un proceso de subordinación progresiva de las fuerzas armadas al poder civil.

En ese contexto, fue un hito importante a nivel de la región centroamericana los acuerdos de paz que surgieron de las cumbres de mandatarios. Las reuniones de Esquipulas I y II, entre otros aspectos, sirvieron para que en los países afectados por la violencia y la represión se instauraran comisiones nacionales de reconciliación. Así, surge en Honduras la Comisión Nacional de Reconciliación, mediante un decreto ejecutivo en 1987, que entre sus principales alcances destaca su notable influencia la posterior creación de la figura del Comisionado de los Derechos Humanos. En diciembre de 1993, el Comisionado ya entrega al entonces presidente de la República su primer informe oficial: *Los hechos hablan por sí mismos*. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras, 1980-1993.

En este informe se reconoce que la desaparición forzada fue una práctica que se dio en Honduras durante la década de los ochenta, y que se evidenció -aunque en menor medida- incluso en los primeros años de los noventa. El informe reconoce que dichas prácticas fueron al menos toleradas, por acción o por omisión, por las autoridades políticas y judiciales de esa época. Asimismo, la evidencia existente establece la responsabilidad de miembros y unidades de las Fuerzas Armadas en las detenciones, torturas y desapariciones. Por otra parte, además del reconocimiento de las violaciones, que fueron constantemente negadas por las autoridades

civiles y militares anteriores, el informe plantea la necesidad de reparar en lo posible el daño causado a las víctimas y la necesidad de que el Estado prevenga y eduque sobre lo que pasó en dicha época, de manera que las nuevas generaciones no vuelvan nunca a permitir situaciones como las vividas en aquellos años.

La prevención sugerida se basaba especialmente en tres líneas de acción: a) la investigación de la verdad y su divulgación, no para acendrar el odio en contra de los responsables, sino para evitar la pérdida de la memoria histórica sobre un nefasto capítulo de la historia nacional; b) las reformas institucionales para la debida protección de los derechos y garantías ciudadanas, que por la subordinación del poder militar al poder civil; y, c) promover activamente una cultura por la vida y por la paz para reducir los niveles de polarización y de inclinación a la violencia como medio privilegiado para resolver los conflictos sociales (Comisionado de los Derechos Humanos, 2002).

Aunque falta consolidar más la institucionalidad y la cultura por el respeto de los derechos civiles y políticos, no cabe duda que se han dado pasos relevantes para mejorar su garantía. No obstante, en materia de derechos económicos, sociales y culturales los desafíos que se presentan son mayores, ya que en estos aspectos la calidad de vida de los hondureños y hondureñas presenta rezagos significativos, evidenciados en los niveles y características de la pobreza en el país. De cualquier modo, y desde la perspectiva de los principios generales de la teoría de los derechos humanos, debe procurarse una concepción integral de estos derechos, en el sentido de comprender que la promoción de los derechos civiles y políticos permiten un mejor contexto para el desarrollo de los económicos, sociales y culturales, y viceversa.

Pero quizá el reto más importante para la consolidación de una institucionalidad y una cultura de los derechos humanos pasa por su legitimación por la ciudadanía. Mientras no se logre una debida apropiación de estos derechos y mientras sean confundidos de forma peyorativa con el accionar de ciertas organizaciones de la sociedad civil, la cultura de los derechos humanos tardará mucho tiempo en orientar plenamente la profundización de la democracia hondureña.

El respeto a los derechos fundamentales debe ser también respaldado por la voluntad del Estado y por la influencia de los medios de comunicación. Mientras existan reductos de voluntades privadas que influyen en las instituciones para desconocer la importancia de garantizar un trato digno a cada ser humano, mientras se siga estigmatizando y criminalizando a las personas en riesgo social, no será posible luchar decididamente contra las verdaderas causas de la inseguridad ciudadana, como son la: la desigualdad social, la impunidad y el resquebrajamiento de la solidaridad y el respeto a la vida y a la convivencia pacífica (véase el recuadro 5.2 y 5.3).

RECUADRO 5.2

Fragmentos seleccionados del informe de la relatora especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en Honduras

Las maras como explicación

29. Después de la visita de la Relatora Especial la Misión Permanente de Honduras ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra envió un informe, de fecha 11 de septiembre de 2001, titulado "Informe preliminar sobre las muertes violentas de adolescentes en Honduras", que fue elaborado por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA). En el informe se vinculan sólida y categóricamente los casos de ejecuciones extrajudiciales de niños y el fenómeno general de la violencia juvenil y la pobreza en Honduras. La Relatora Especial desea destacar que esa supuesta vinculación es errónea. Si bien los niños son vulnerables y están expuestos a abusos y a la delincuencia por su falta de autonomía, la delincuencia juvenil nunca puede utilizarse para justificar que las fuerzas de seguridad maten a niños a fin de mantener el orden público. No cabe duda de que en el país existen bandas violentas de niños conocidas como "maras" o "pandillas", pero la existencia de esos grupos no puede servir de excusa para las ejecuciones cometidas con impunidad por las fuerzas de seguridad. La ejecución de niños por personas no identificadas se suele atribuir a los enfrentamientos entre las maras. Causa alarma que un sector de la prensa hondureña suela satanizar a los niños de la calle y atribuya el alto grado de violencia existente en el país a las bandas de menores. Esos periodistas alimentan aún más el discurso de odio de algunos políticos y dirigentes empresariales destacados, quienes deliberadamente predisponen a la opinión pública contra los niños de la calle. De este modo, se trivializa la violencia contra esos niños y hasta se incita a matarlos. En último término, se estigmatiza a cada niño tatuado y a los niños de la calle como criminales que están creando un clima poco propicio para las inversiones y el turismo en el país.

32. El Gobierno de Honduras reconoce que la delincuencia juvenil constituye el 5% de todas las infracciones y faltas registradas en el país. En un estudio que el INFA realizó en 1999 con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se indicaba que el 0,02% de todos los homicidios cometidos en Honduras se atribuían a menores. No obstante, los funcionarios y los medios de información insisten en achacar toda la culpa de la mayor parte de los delitos a los niños de la calle. Insistentemente tratan de crear la impresión de que la mayoría de los niños muertos han perdido la vida a causa de los enfrentamientos entre bandas, lo que es falso y da lugar a conclusiones equivocadas. Las estadísticas oficiales indican que en el primer semestre de 2001 se dio muerte a 66 menores. Según las organizaciones de derechos humanos, el número es aún más alto. La gran mayoría de esos casos quedan sin resolver y no se sabe quiénes son sus autores. El Gobierno confirma que más de la mitad de las muertes de niños comunicadas que dan sin solución. Las ONG consideran que no se pueden llevar a cabo esas ejecuciones sin auspicio oficial; su número es demasiado alto para que no estén organizadas y planificadas. Los datos disponibles indican que en efecto esas ejecuciones podrían ser obra de grupos o personas, con o sin auspicio oficial. Cualesquiera sean la identidad o las relaciones de los autores, el Gobierno tiene la responsabilidad de investigar y resolver los casos de ejecución. Cabe esperar que realice esfuerzos intensos y serios para determinar quién los ha cometido y proteger a la población de nuevos actos de violencia. Hasta el momento los esfuerzos no han sido muy entusiastas y no se han afrontado las atrocidades de forma seria y responsable.

F. Voces de la niñez

39. La Relatora Especial quedó abrumada, afectada y afligida después de las diversas entrevistas que tuvo con niños en Honduras. Muchos eran mareros, otros no. Lo que todos tenían en común era la pobreza y la inseguridad que nace de la injusticia social, política y económica. La Relatora Especial sabe que millones de niños del mundo sufren circunstancias análogas. La situación es alarmante y no es buen augurio para el futuro de ninguna sociedad. La población infantil de los numerosos países del mundo en desarrollo está aumentando. Hay más niños que adultos y, sin embargo, los primeros no tienen un futuro asegurado. Muchos niños están abandonados, desatendidos y echados a perder desde muy temprana edad a causa de la violencia. Tienen más acceso a las armas y los narcóticos que a los libros y el saber. Viven en la calle y no en un hogar y tienen duras experiencias en vez de infancia.

40. Es preciso que todos reconozcan que los niños de la calle o, dicho sea de paso, la pobreza en toda sus manifestaciones no son "un mal necesario". La pobreza tiene remedio, para lo que se necesita paciencia, sinceridad y una buena planificación. Ante todo, se necesita voluntad política y valor para erradicarla con un programa eficaz basado en la justicia para todos. En particular, hay que invertir suficientes recursos y la justicia económica de los niños exige que se piense de otra manera al planificar los presupuestos. Ninguno de los niños a los que entrevistó la Relatora Especial pidió piedad, caridad o ayuda. Lo que querían era vivir con dignidad y en condiciones de seguridad: clamaban por la oportunidad de gozar de sus derechos de niños. Si bien cada una de las conversaciones fue singular y a menudo impactante, algunos de los relatos de los niños fueron especialmente sintomáticos e indicativos de sus esperanzas, temores y aspiraciones cotidianos. La Relatora Especial quisiera compartir aquí algunas de las palabras que quedaron grabadas en sus mente:

"Quiero que mi madre esté orgullosa de mí." / "Saquen al "Chinaman" de nuestra vida, No quiero morir en las montañas." / "Quiero quitarme el tatuaje , pero necesito a mis amigos." / "Nadie se preocupa por nosotros, todos están demasiado ocupados." / "Quiero ser técnico para poder ayudar a mi madre." / "Nuestro lema es: Amigo, vive por tu madre y muere por tu barrio." / "Quiero ir a los Estados Unidos, puesto que aquí no tengo futuro." / "Quiero estudiar e ir a la escuela." / "Quiero dejar esta vida de miseria y vivir en paz, sin temor." / "Quiero estar en paz con la policía."

Fuente: Consejo Económico y Social de la ONU. 2002.

RECUADRO 5.3

La influencia del informe de la relatora especial de Naciones Unidas en las diferentes instituciones hondureñas

La naturaleza de las ejecuciones extrajudiciales en Honduras proviene de diferentes fuentes: Los ajustes de cuentas privados, las peleas entre padillas "máras" y las ejecuciones policiales extrajudiciales (o por comités locales de seguridad).

Durante los últimos 5 años se ejecutó extrajudicialmente un total de 684 niños y niñas menores de 18 años. Durante el año 2001 se presentaron 418 casos de niños y jóvenes muertos bajo las referidas circunstancias, de los cuales 217 eran niños y niñas. ("Investigación sobre Asesinatos de Niños y Niñas en Honduras" Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia. – Tegucigalpa, Septiembre de 2002 - Pag. 4).

El contenido del reporte de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Sra. Asma Jasehangir, promovió la realización de informes nacionales a nivel gubernamental, de entre estos documentos podemos destacar:

- a. "Investigación sobre Asesinatos de Niños y Niñas en Honduras – años 1998 a enero 2002 " presentado por el Ministerio Público (Fiscalía Pública), La Corte Suprema de Justicia y El Instituto Hondureño sobre la Niñez y la Familia.
- b. "Investigación sobre Asesinatos de Niños y Niñas en Honduras" Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia. – Tegucigalpa, Septiembre de 2002
- c. "Informe Especial sobre Muertes Violentas de Niños ,Niñas y Adolescentes en Honduras", Informe especial del Comisionado Nacional de Derechos Humanos , Tegucigalpa, MDC, 21 de enero de 2002 – LEO VALLADARES LANZA (Defensor del Pueblo).

Del conjunto de los referidos informes se extraen los siguientes párrafos:

"73. En la documentación reunida y analizada para el presente informe queda perfectamente claro que en Honduras algunos niños han sido ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad. En la mayoría de los casos los niños estaban desarmados y no habían provocado a la policía a emplear la fuerza, y mucho menos medios letales. Ha habido muy pocas investigaciones y juicios en casos de ejecuciones extrajudiciales y rara vez se imponen condenas. Además de la impunidad institucionalizada, existe una campaña para condicionar a la opinión pública a apoyar la «limpieza» de los niños indeseables en las calles de Honduras)... 74. En las medidas adoptadas por el Gobierno no se transmite un mensaje claro a la policía en el sentido de que sus miembros serán enjuiciados por los actos de abuso de autoridad o violaciones de los derechos humanos que cometan. Tampoco se ha apresado a los miembros de los poderosos grupos imputados de haber cometido esos delitos ni las autoridades les han significado que no pueden recurrir al asesinato con el pretexto de tratar de crear un clima propicio para la recuperación económica. La Relatora Especial desea recordar al Gobierno que en última instancia son la situación en materia de derechos humanos, la estabilidad y el estado de derecho en el país los que inspirarán confianza entre los donantes y los inversores, y no la arbitrariedad y la violencia de los poderosos contra los miembros más vulnerables de la sociedad). "(Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas: Consejo Económico y Social E/CN 4/2003/3/Add. 2 14 de junio de 2002 – Comisión de Derechos Humanos 59º período de sesiones. Pag. 26).

"58. En este sentido, la Relatora Especial desea destacar dos casos concretos señalados a su atención, que ilustran bien a las claras el clima de indiferencia e impunidad dominante en relación con los asesinatos de niños. Alexander Joval Villatoro, taxista de profesión, informó a la Relatora Especial que cuando estaba recogiendo a dos pasajeros para trasladarlos a Capcamo un policía vestido de civil, insistió en viajar con los otros pasajeros hasta el mismo destino. Cerca de Capcamo, el policía pidió al taxista que se detuviera al borde de la carretera, donde tres niños lo estaban esperando. El policía les preguntó con gran enfado por qué habían salido corriendo. Agarró al mayor de todos por la camisa y lo atrajo violentamente hacia sí. En ese momento el conductor se asustó y se alejó del lugar en su automóvil. Al día siguiente escuchó en el noticiero de que tres menores habían sido asesinados en el mismo lugar donde había dejado al policía. El taxista y uno de los pasajeros, que era una mujer, testificaron en contra del policía, que fue detenido. Desde entonces se ha atentado cuatro veces contra la vida del Sr. Villatoro, que también ha sido amenazado por los familiares del policía imputado. Varios meses después de los hechos, el Sr. Villatoro fue detenido y encarcelado, acusado de haber cometido delitos relacionados con las drogas. Por último, el 5 de agosto de 1999 su causa fue sobreesida y fue puesto en libertad, aunque aún sigue viviendo con miedo. Informó a la Relatora Especial de que se había mudado varias veces y no podía declarar contra el policía imputado". (Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas: Consejo Económico y Social E/CN 4/2003/3/Add. 2 14 de junio de 2002 – Comisión de Derechos Humanos 59º período de sesiones. Pag. 20).

"Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hablar de ejecuciones sumarias o arbitrarias es hablar de privaciones de vida como resultado de homicidios asesinatos o atentados a la vida o integridad personal, perpetrados por orden de un gobierno o de sus agentes o con su complicidad o tolerancia o aquiescencia sin un proceso judicial o legal. Por indicios encontrados en los cadáveres (disparos certeros en la cabeza, etc.) objeto de esta investigación, así como la circunstancias en que ocurre la muerte (muerte por encapuchados , etc.) no se descarta la posibilidad de encontrar elementos que conforman la modalidad de Ejecución Sumaria. ("Investigación sobre asesinatos de niños y niñas en Honduras – años 1998 a enero 2002 " presentado por el Ministerio Público (Fiscalía Pública), La Corte Suprema de Justicia y El Instituto Hondureño sobre la Niñez y la Familia. Pag. 16)... En tres casos en los que se ha identificado la participación de miembros de comités de seguridad ciudadana o de vigilancia, se confirma una vez más que en lugar de representar seguridad para la sociedad, son grupos que atentan contra los derechos humanos de las personas. No se descarta que éstos y otros casos, califiquen dentro del tipo de ejecución sumaria (ver fichas nos. 275 y 356)".

RECUADRO 5.3 continuación

"20. El Silencio de la Sociedad Hondureña ante estos hechos, resulta preocupante, porque han caído ya, en los extremos de tolerancia y naturalidad que viene a alimentar las injusticias y la impunidad". ("Investigación sobre asesinatos de niños y niñas en Honduras – años 1998 a enero 2002" presentado por el Ministerio Público (Fiscalía Pública), La Corte Suprema de Justicia y El Instituto Hondureño sobre la Niñez y la Familia. Pag. 20").

"Resulta difícil determinar la participación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o de personas particulares que sean responsables o cómplices del asesinato de niños y niñas, ya que en la mayoría de los casos no se aportan pruebas, ni se cuentan con testigos que ayuden a esclarecerlos." (Investigación sobre Asesinatos de Niños y Niñas en Honduras". Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia. Tegucigalpa, septiembre de 2002, pág. 11-12).

"El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) interpuso denuncia criminal contra la ex Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad y contra miembros de los Comités de Seguridad Ciudadana por los delitos de Homicidio y tentativa de homicidio. De los nueve casos detallados en ese expediente judicial, tres casos aparentan ser ejecuciones arbitrarias o sumarias... Hasta la fecha ha quedado evidenciado la relación estrecha entre estos Comités de Seguridad Ciudadana y agentes policiales. Varias denuncias debidamente documentadas en el CODEH evidencian excesos como: 1. Portación de armas de grueso calibre como AK 47, fusiles M-16, escopetas, chimbas, armas de cañón largo y otras de uso exclusivamente policial por parte de agentes de los Comités de Seguridad Ciudadana. 2. Patrullajes preventivos en vehículos policiales e inclusive se citan casos de uso de vehículos particulares sin placas y con tripulantes con pasamontañas, vidrios polarizados. Contraviniendo La Ley Orgánica de la Policía en su artículo 22. 3. Comisión de graves delitos contra la vida y la integridad personal de ciudadanos. 4. Cobros indebidos por prestar este servicio, pese a que está prohibido esta acción... 5. Casos reportados de acciones de "limpieza social" que a criterio de los integrantes de estos comités frenaran la ola de inseguridad en el país. (La Tribuna 27 de septiembre de 1999. La Tribuna y El Heraldo 7 de diciembre de 1999)". (Informe Especial sobre Muertes Violentas de Niños, Niñas y Adolescentes en Honduras", Informe especial del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Tegucigalpa, MDC, 21 de enero de 2002 – LEO VALLADARES LANZA (Defensor del Pueblo) Pag. 44).

Fuente: informes citados.

En la medida en que no se resuelvan las contradicciones fundamentales de la sociedad hondureña, la tendencia de la inseguridad, seguramente, irá en alzada, con lo que la evocación de las medidas represivas y estigmatizantes hacia los excluidos puede cobrar auge peligrosamente, situando al país en riesgo de volver a sufrir estados de excepción que lesionen, en nombre de la seguridad, valores fundantes como la libertad y la dignidad humana.

La sociedad civil como vía de participación ciudadana en la lucha por los derechos humanos

La represión de la primera mitad de los ochenta tuvo como contrarreacción el surgimiento de las primeras organizaciones de defensa de los derechos humanos, reclamando las continuas violaciones de derechos civiles y políticos cometidos y consentidos por los gobiernos de la época. Conforme se fue avanzando en la estabilidad democrática formal, se observó en los noventa el surgimiento de otra ola de organizaciones con enfoque en los derechos de los grupos étnicos, de las mujeres y de los niños, así como grupos de medio ambiente (Cruz, 2002).

Hoy día, en Honduras, el movimiento de defensa de los derechos humanos tiene el carácter de un actor social. Se estima que existen en el país entre 8,000 y 10,000 organizaciones de la sociedad civil, y un número importante de ellas se definen como organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos (Cruz, 2002). De una muestra de 251 organizaciones de sociedad civil encuestadas

por un estudio del ASDI-BID, el 27% mostraron tener los derechos humanos como uno de sus áreas temáticas.

También existen muchas organizaciones que, quizá, no se conciben como organizaciones de derechos humanos, pero que, sin embargo, tienen incidencia en asuntos relacionados con los derechos económicos y sociales. Entre este tipo de organizaciones se cuentan los sindicatos, las organizaciones para el desarrollo y para la juventud e infancia y las organizaciones campesinas, étnicas y humanitarias.

La sociedad civil hondureña ha logrado un alto nivel de organización secundaria y terciaria al formar federaciones y foros entre ellas para coordinar la articulación de demandas frente al gobierno. Se estima que existen por lo menos 36 importantes redes y coordinaciones de organizaciones de la sociedad civil que generan actividades de abogacía en Honduras, según la encuesta de ASDI-BID, (Cruz, 2002).

Un ejemplo en el campo de los DESC es la red denominada Convergencia de Mujeres, que en 2001 publicó un manifiesto llamado *Nuestro Aporte a la Democracia: Agenda Mínima de las Mujeres* que identificó una serie de problemas y demandas. Por ejemplo, se destacó los "altos índices de desempleo que afecta particularmente a las mujeres que viven en condiciones de pobreza" con la recomendación de "que el Estado promueva y amplíe ofertas de formación laboral para mujeres." Sus reclamos y demandas se basaron explícitamente en una visión de los DESC como parte de los derechos humanos.

En el mismo año también se emitieron manifiestos de demandas coordinadas por otras federaciones como la “Estrategia de combate a la pobreza: Propuesta de INTERFOROS, Instancia de la Sociedad Civil,” que destacó la inequidad en el ejercicio de los derechos humanos como un determinante de la pobreza (INTERFOROS, 2001) y la “Estrategia de combate a la pobreza en la región occidental de Honduras” publicada por La Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG, 2001). Aún a nivel regional aparecen demandas concertadas de la sociedad civil por federaciones internacionales como la Iniciativa Centroamericana de Mujeres para el Seguimiento a Estocolmo (2001) y La Coordinadora de la Sociedad Civil Centroamericana Solidaria (2001).

Las demandas de la sociedad civil se construyen en una relación con el reconocimiento estatal de los derechos. Como es obvio, la demanda ciudadana puede motivar el reconocimiento de un derecho específico por el gobierno, pero también existe una relación inversa: una vez reconocido un derecho o grupo de derechos por el Estado, reconocimiento sirve como base para generar más demandas de la ciudadanía de protección y satisfacción. Es relevante, entonces, analizar ahora el estado del reconocimiento jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales en Honduras.

La institucionalización de los derechos humanos

Para los DESC, igual que para los derechos humanos en general, el primer paso de este proceso tiene que ser su reconocimiento legal dentro del marco jurídico del país. Este reconocimiento puede ser por su inclusión como un principio constitucional o por ratificar un instrumento de derecho internacional, pero es importante que los derechos humanos sean reconocidos al más alto nivel jurídico para que no puedan ser comprometidos ni revocados por ningún otro acto legislativo. Otra parte fundamental de este proceso de institucionalización es fortalecer los organismos públicos defensores de los derechos humanos para que sean accesibles, eficaces y eficientes.

Las leyes deben articular los deberes correspondientes de los órganos del Estado y de los ciudadanos. Por ejemplo, si se trata del derecho de los niños a la educación, la ley puede especificar que los padres tienen el deber de mandar a los hijos a la escuela, que los maestros tienen la responsabilidad de recibir a cada alumno sin discriminación, que la Secretaría de Educación debe desarrollar los contenidos educativos apropiados, que el Fondo Hondureño de Inversión Social construya las escuelas necesarias, etcétera.

Dentro del programa de modernización del Estado de la última década, se ha creado una serie de nuevas instituciones y leyes para proteger y avanzar en los derechos humanos (véase el recuadro 5.4).

RECUADRO 5.4

Leyes e instituciones creadas para la protección y el cumplimiento de los derechos humanos

Medidas Legislativas

- Ley de Protección al Consumidor (1989).
- Código de Salud (1991).
- Ley de la Tercera Edad (1993).
- Ley General del Ambiente (1993).
- Código de la Niñez y de la Adolescencia (1996).
- Ley Contra la Violencia Doméstica (1997).
- Ley para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (1999).
- Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (2000).

Instituciones

- Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (1992-1995).
- Consejerías de la Familia (1993).
- Ministerio Público (1994).
- Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (1997).
- Instituto Nacional de la Mujer (1998).
- Secretaría de Seguridad (1998).

Fuente: PNUD, 2002.

Muchas de estas instituciones públicas han experimentado importantes reformas y esfuerzos de fortalecimiento en los últimos años para mejorar la calidad de sus servicios y extender su cobertura.

La creación del Ministerio Público en 1994, como un instrumento gratuito de representación de la acción penal pública, fue un paso de suma trascendencia en la ampliación del acceso a la justicia, factor esencial para combatir los ambientes de impunidad que favorecen las violaciones de los derechos.¹ En el Ministerio Público se han creado una serie de fiscalías especiales que atienden denuncias de ciertos tipos de delitos, algunas de las cuales tienen relevancia especial para los DESC; por ejemplo, casos de trabajo infantil pueden ser denunciados ante la Fiscalía de la Niñez, la violencia doméstica ante la Fiscalía de la Mujer y problemas con servicios públicos ante la Fiscalía del Consumidor.

El Ministerio Público reporta varias debilidades que impiden su eficacia. Según algunos de los fiscales entrevistados, el primer desafío es la carencia sistemática de los recursos necesarios para realizar su trabajo, carencia por limitaciones de tipo presupuestario. Una consecuencia de esta situación es el acceso desigual a los servicios del Ministerio Público para personas que viven en las zonas marginales del país, porque no hay medios logísticos adecuados para hacer visitas de campo ni para establecer una red más extensa de oficinas regionales.

Otra dificultad que ha afectado el debido seguimiento de las denuncias son los problemas de coordinación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad (ver recuadro 5.5).

RECUADRO 5.5

El Ministerio Público

Creado como órgano independiente de la Corte Suprema en 1994 fue dotado legislativamente de gran independencia funcional. Sus dos altos cargos directivos son nombrados por el Congreso Nacional. Operativamente se encuentra dividido en diferentes fiscalías. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos es la encargada de investigar a funcionarios civiles y militares en el ejercicio de sus funciones. Esta fiscalía a su vez se encuentra separada en: cementerios clandestinos (desaparecidos temporales o permanentes), ejecuciones extrajudiciales, delitos varios y centros penales.

Investigación y procesamiento

En 1998 entró en vigor la Ley de la Policía. Dicha normativa afectó sustancialmente la actividad del Ministerio Público. Con anterioridad a la promulgación de la referida Ley la Dirección de Investigación Criminal dependía del Ministerio Público. Con posterioridad a la entrada en vigor de esa normativa se hizo depender dicho organismo de La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad Pública. A pesar de que el referido cuerpo recibe instrucciones del Fiscal General, en la práctica surgen numerosas diferencias sobre las investigaciones de los casos. A los diferentes conflictos de coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Preventiva (de base) y la Dirección de Investigación Criminal se unen problemas como: diferencias salariales, corrupción y procedimientos sancionadores.

Nuevo Código Procesal Penal

La reciente entrada en vigor del nuevo "Código Procesal Penal" (20 de febrero de 2002) a afectado sustancialmente el funcionamiento institucional en áreas como:

- La creación de límites de prisión preventiva (entre uno y dos años y medio). A estos efectos el Comisionado de Derechos Humanos reportó en su oficina del Departamento de Ceiba un caso de un hombre el cual permaneció en prisión por espacio superior a diez años en espera de juicio, resultando luego absuelto.
- Creación de un criterio de "oportunidad" en la imputación de delitos. Atendiéndose a factores como la reincidencia, la pena asignada al cargo (no más de cinco años) y la reparación del daño causado. Se pretende que este factor reduzca volumen de casos y el "atasco" judicial.
- Se impulsa el proceso verbal.

Fuente: Ministerio Público y Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, 2002.

Mientras que el Ministerio Público sólo tiene competencia para atender delitos², existe otras infracciones de las leyes que exceden el ámbito penal, pero que igualmente pueden perjudicar los DESC. En estos casos, el perjudicado puede recurrir ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras, fundado en 1992 mediante el Decreto Ejecutivo e incorporado a la Constitución por medio de las reformas de 1994-95.

El Comisionado tiene las funciones de prevención y protección frente a las violaciones de los derechos humanos. Para llevar a cabo sus atribuciones, esta entidad puede utilizar herramientas extrajudiciales como son la investigación, la negociación y la conciliación, así como hacer recomendaciones a los demás órganos del Estado, con base en las quejas presentadas por la ciudadanía. Ejemplos de violaciones en materia de DESC de las que puede atender el Comisionado son la denegación de servicios médicos o abandono de pacientes en el sistema público de salud, despidos ilegales o afectación de los derechos sindicales, negativa de matrícula o interferencia en los derechos en libertad de cultos y la violencia doméstica, entre otros. Más allá de responder a quejas, también tiene capacidad de manejar investigaciones sociales de especial relevancia en el campo de los derechos huma-

nos y de incidir en la formación de políticas por medio de recomendaciones al Congreso y a otros órganos.

El Comisionado Nacional tiene una competencia institucional amplia. Según el Artículo 23 de su Ley Orgánica, puede recibir quejas de "todas las personas naturales que se sientan afectadas por actos administrativos arbitrarios, violaciones a los derechos humanos u otros actos ilegales" Además, puede iniciar investigaciones y hacer recomendaciones a todos los órganos del Estado aun sin que medie alguna queja de la ciudadanía. Para realizar tal fin, el Comisionado goza de un poder de investigación y negociación dentro de las instituciones del Estado, a las que "podrá dirigirse directamente a cualquier servidor de la administración pública, organismos o instituciones de cualquier naturaleza y sus titulares tendrán la obligación de contestar las peticiones y requerimientos que se formulen" (Art. 6, Ley Orgánica del Comisionado).

Para el año 2001, el Comisionado recibió más de nueve mil solicitudes (recuadro 5.6), de las que más de 4 mil fueron quejas admisibles y en los otros cinco mil casos recibieron ayuda informal, principalmente para remitirlas a la autoridad competente, con seguimiento a la atención que estas autoridades hayan brindado al denunciante (Conadeh,

2002). Sin embargo, las quejas en materia de los DESC suelen ser muy pocas, situación que se debe, en parte, al menor conocimiento que la gente tiene sobre los derechos de este tipo (Pineda, 2002).

Tratados internacionales, informes nacionales y el derecho internacional

Al término de la Segunda Guerra Mundial se inició una práctica internacional de fortalecimiento de los instrumentos sobre Derechos Humanos. Este proceso fue realizado mediante tratados bilaterales, regionales y universales. Este último cuerpo de instrumentos internacionales pretendía que, gracias a su general aceptación se configurara lo que constituye parte de la “Costumbre Internacional y los Principios Generalmente Aceptados del Derecho Internacional”. La Convención de los Derechos de los Tratados y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia reconocen su valor de fuente del Derecho Internacional. Una de las formas de creación de estos entes normativos consiste en la general aceptación de los Tratados Internacionales sobre la materia. De esta manera y buscando una aplicación universal de los referidos textos se ha fomentado su masiva ratificación, considerándose que puedan llegar a un estado de ratificaciones (u otros medios de aceptación del compromiso) suficientes para vincular a otros estados que todavía no hubieran mostrado su consentimiento por la vía del tratado.

Este desafío en el proceso de ratificaciones, envuelve el peligro de “mercantilizar” las convenciones sobre derechos humanos. De tal forma que la ratificación de las mismas pudiera convertirse en condiciones para el acceso a financiación o ayuda internacional. Considerando este y otros hechos, los principales Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos fueron dotados de entes administrativos encargados de monitorear el cumplimiento de las referidas convenciones. La forma escogida para evaluar el grado de cumplimiento del contenido de los tratados fue la presentación periódica de reportes nacionales ante los órganos de los tratados. A estos efectos se presenta un cuadro de las principales convenciones sobre derechos humanos, el estado de ratificaciones del gobierno de Honduras, la periodicidad con la que se requieren los informes y los reportes realmente presentados por el gobierno de Honduras (ver cuadro 5.1).

Una mirada a los derechos económicos, sociales y culturales

Como se ha dicho, existe en el país un amplio marco institucional y legal para los derechos humanos, así como una variedad de actores trabajando por tales derechos. No obstante, también se observa una brecha entre el reconocimiento en las leyes y tratados internacionales y la aplicación y su cumplimiento (ver recuadro 5.7).

Algunos problemas de logros en desarrollo humano

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue ratificado por Honduras en 1981, acto que, de acuerdo con la Constitución vigente, integra el instrumento como parte de la Ley interna del país. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos humanos en la ley no significa necesariamente que se cumplen. Honduras no está ajena a esta tendencia, como muestran los siguientes ejemplos:

- Si bien todos y todas tienen igual derecho al trabajo, en la realidad existen fuertes desigualdades en el acceso a las fuentes de trabajo. Mientras que el subempleo urbano es de 16% para hombres y 19% para mujeres, en las zonas rurales es de 25% para mujeres y 37% para hombres (DGEC: EPHPM, 1999).
- La Constitución garantiza a todo trabajador condiciones equitativas de trabajo, garantía que incluye salario igual por trabajo igual, según el Pacto Internacional. Sin embargo, el ingreso mensual promedio para hombres dobla al que ganan las mujeres: 2.313 lempiras frente a 978 lempiras (DGEC: EPHPM, 1999).
- El derecho a la seguridad social sólo lo goza una minoría de hondureños. La cobertura para enfermedad-maternidad se estima que llega sólo a un 25% de la población económicamente activa y, peor aún, la cobertura de invalidez, vejez y muerte cubre sólo al 16% (Mesa-Lagos, 2000).
- Las tasas de mortalidad infantil indican que existen fuertes desigualdades en el goce de los derechos familiares y de la niñez. Mientras que en el dominio urbano, uno de cada 28 niños muere antes de su quinto cumpleaños, en las áreas rurales la cifra es uno de cada 20 y entre los niños cuyos padres no tienen educación, uno de cada 12 niños no alcanzan la edad de cinco años, lo que indica claramente que los niños no gozan de iguales oportunidades de desarrollarse con buena salud. (ENESF, 2001).
- Según el Código de la Niñez y de la Adolescencia promulgado en 1996, está prohibido que los menores de 14 años trabajen, de acuerdo con la prohibición constitucional del trabajo infantil y su reconocimiento internacional como una violación de los derechos de la niñez. Sin embargo, un estudio estimó que el 12.5% de los niños y niñas entre 10 y 14 años estaban trabajando en 1998, o sea, unos 97,000 niños (UNICEF, 1999).³
- El derecho a la alimentación, asegurado en el Artículo 11 del Pacto Internacional no se cumple en buena parte de las familias hondureñas. Según el último Censo de Talla y Peso, el 25% de los niños urbanos y un 42 por ciento de los niños rurales matriculados en el primer grado muestran síntomas de desnutrición crónica. En cuatro departamentos - Intibucá, Lempira, La Paz y Copán - más de la mitad de los niños censados sufren desnutri-

RECUADRO 5.6

El comisionado de derechos humanos y la defensa de los principios constitucionales

La doctrina general del derecho político sostiene que todo sistema democrático se basa sobre la independencia y equilibrio de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Los anglosajones denominan “Check’s and Balance’s” a la potestad de un poder para controlar la actividad de otro. Así se entiende que el poder judicial en su función de interpretación de las leyes (recursos constitucionales y ordinarios) controla la potestad normativa del ejecutivo. El ejecutivo mediante la institución del indulto puede limitar las actividades de los órganos judiciales. El legislativo mediante la figura de moción de censura sobre el presidente del gobierno controla al ejecutivo.

Desde hace varios años en Honduras existe un conflicto que puede afectar seriamente a este sistema de equilibrio democrático. En concreto se refiere a la capacidad interpretativa sobre la constitución o ,lo que es lo mismo, a la capacidad interpretativa de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente.

El Congreso Nacional mediante “Decreto Legislativo No. 161-99 de 20 de octubre de 1999, (publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 29,034 de 30 de noviembre de 1999), que ratificó el Decreto Número 307-98 , dice:

“Refórmese el art. 218 de la Constitución: No será necesaria la sanción, ni el poder ejecutivo podrá poner el veto en los casos y resoluciones siguientes :... 9) En las interpretaciones que se decreten a la constitución de la República por el Congreso Nacional...”

En otra reforma constitucional , Decreto Legislativo No. 276-2002 de 8 de agosto de 2002 , publicado en la Gaceta No. 29,861 de 16 de agosto de 2002 se establece que:

“...reafirmar el artículo 205 de la Constitución de la República... corresponde al Congreso Nacional la atribuciones siguientes:... 10) Interpretar la Constitución de la República en sesiones ordinarias, en una sola legislatura, con dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros. Por este procedimiento no podrán interpretarse los Artículos 373 y 374 Constitucionales”.

Los referidos artículos han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Constitucional) por el Comisionado de Derechos Humanos (Ombudsman) con fecha 13 de noviembre de 2002 (Ramón Abad Custodio . Sú interés en la materia queda reflejado en la página catorce del referido recurso (Centro de Documentación de la Oficina del Ombudsman de Honduras):

“Esa función esencial del Comisionado Nacional (Ombudsman) es afectada por la pretensión de interpretación constitucional que es fuente de inestabilidad o inseguridad e incertidumbre jurídica por dejarse a criterio del Congreso Nacional, en sus diferentes composiciones y alianzas políticas variables, fijar la comprensión no solo de lo que es el sentido y alcance de lo establecido en la Constitución en materia de derechos humanos, libertades fundamentales, garantías de las personas, garantías institucionales, valores fundamentales de la Constitución y aún las disposiciones sobre la supremacía e inviolabilidad de la Constitución, sino que inclusive de reformar, por esa vía, esas disposiciones, tal y como prueba la irregular práctica legislativa precedente”.

Fuente: Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, 2002.

RECUADRO 5.7

Observaciones finales del comité sobre los derechos, económicos, sociales y culturales sobre el informe nacional de la república de Honduras, 21 de mayo de 2001 (E/C.12/1/Add.57), consejo económico y social, convención sobre derechos económicos, sociales y culturales

Aspectos positivos

- El comité se congratula de la afirmación realizada por el Estado parte en el sentido de reiterar que la convención es parte del derecho nacional y que puede ser invocado ante los tribunales, aunque no se puedan presentar ejemplos jurisprudenciales.
- El comité aprecia la declaración del estado parte en el sentido de apoyar el protocolo opcional de la convención.
- El comité se congratula del establecimiento institucional de las "Fiscalías Especiales de Derechos Humanos", "El Instituto nacional de la Mujer", "Las Consejerías de la Familia" y "El Ombudsman" así como de la adopción de leyes importantes referentes a derechos humanos.
- El Comité se congratula de los programas de apoyo a las familias que tratan de beneficiar a las familias más pobres.
- El comité señala que el porcentaje del presupuesto nacional dedicado a la familia aumentado continuamente entre 1996-2001.
- El Comité indica con satisfacción que durante el periodo 1996-200, 345 centros de educación básica fueron creados en 18 departamentos.

Factores y dificultades que impiden la ejecución de la convención

- El país está considerado como una parte altamente endeudada y que más del 40% del presupuesto nacional anual está dedicado a la deuda externa.
- Las políticas de ajuste estructural han perjudicado el disfrute de estos derechos.
- El serio problema de pobreza en el país se ha visto agravado por los devastadores efectos del huracán "Mitch".

Materias objeto de preocupación

- La falta de entrenamiento en el área de derechos humanos dentro de la función pública, especialmente en el orden judicial.
- La desigualdad entre el hombre y la mujer especialmente en las remuneraciones laborales y la representación en los organismos del estado.
- La discriminación hacia la población indígena en el trabajo y sus derechos históricos sobre la tierra.
- Condiciones laborales en empresas transnacionales (salarios, empleo femenino, salubridad)
- Escaso número de inspectores laborales.
- Insuficiencia del salario mínimo de los trabajadores.
- Falta de protección de los sindicatos y la limitación de que solo exista un sindicato por empresa.
- Alto número de niños que se ven obligados a trabajar y la inclusión de los niños de la calle en las "maras". Así como la explotación sexual y la prostitución de menores y la falta de programación sobre estas materias.
- Carencia de una estrategia sobre la vivienda, considerando el daño causado por el huracán "Mitch".
- Aumento de la violencia doméstica y la inexistencia de preparación y aptitudes por parte de la policía.
- Aumento de las expropiaciones forzosas sobre las tierras de los campesinos.
- Progresivo aumento del uso de pesticidas y sustancias tóxicas en determinados sectores laborales como las "bananeras" y las minas de oro.
- Aumento de la deforestación.
- Insuficiencia de centros médicos, especialmente en el área rural. Alto grado de HIV/SIDA.
- Restricciones al uso del condón.
- Alto grado de analfabetismo (19.5% de la población).
- Limitaciones de la población indígena a desarrollarse en su lengua autóctona.

Fuente: Página web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2002.

CUADRO 5.1

Principales convenciones sobre derechos humanos

Fecha de expresión del consentimiento por el Gobierno de Honduras	Informes periódicos requeridos por diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos	Informes presentados por el Gobierno de Honduras ante los comités
Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De 16 de diciembre de 1966.	17 de febrero de 1981 Resolución del Consejo Económico y Social (1988/4). Informe inicial: dos años desde la entrada en vigor. Informes periódicos: cada 5 años. Requerimientos de información específica.	Reporte inicial 23/07/98. Intercambio de documentos referentes a datos del informe inicial. Observaciones finales E/12/1/Add.57.
Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. De 16 de diciembre de 1966.	25 de agosto de 1997 Artículo 40. 1-3 Informe inicial: un año desde la entrada en vigor. Informe periódico: cada cinco años CCPR/C/19/ Rev. 1.	
Protocolo Opcional de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.	19 de diciembre de 1966 (solo firmas)	
Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial De 7 de marzo de 1966.	Artículo 9 Informe inicial: un año desde la entrada en vigor. Informe periódico: dos años. Bajo petición del Comité.	
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.	3 de marzo de 1983 Artículo 18 Informe inicial: un año desde su entrada en vigor. Informe periódico: cada cuatro años. Posibilidad de requerir información específica.	
Protocolo Opcional para Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. De 18 de diciembre de 1979.		
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Inhumanos, Crueles y Degradantes. De 10 de diciembre de 1984.	5 de diciembre de 1996. a Artículo 44 Informe inicial: cada dos años. Informe periódico: cada cinco años.	
Convención sobre los Derechos del Niño. De 20 de noviembre de 1989	10 de agosto de 1990.	Segundo Informe Periódico de Honduras 1998 (20/02/98) e intercambio de documentos al respecto (CRC/C/SR.542).
Protocolo Opcional de la Convención sobre los Derechos del Niño	9 de mayo de 2002	
Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias. De 10 de diciembre de 1990.		

Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

ción crónica (PRAF, 2001).

- El acceso a agua potable y a un sistema adecuado de eliminación de aguas negras puede ser el aspecto básico del derecho a la salud. Sin embargo, más de un millón de hondureños no goza del derecho a estas condiciones higiénicas: unos 122,361 en las ciudades y unos 910,054 en las áreas rurales, donde aproximadamente una de cada cuatro personas no tiene ni inodoro ni letrina (DGEC: EPHPM, 1999).

- La Constitución asegura que “La educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura...” No obstante, el porcentaje de niños entre 5 y 14 años que no asisten a la escuela ha aumentado de un 7.1% en 1991 a un 8.9% en 1999, una clara violación del derecho a la educación primaria universal reconocida en el Pacto Internacional (DGEC: EPHPM, 1991 y 1999).

- Dentro del concepto de los derechos culturales, se incluye también el derecho al alfabetismo, que debe ser promovido por programas de educación especiales del Estado, deber reconocido explícitamente en la Constitución de Honduras. Si bien la población analfabeta hondureña disminuyó del 22% para el año 1991 al 19% en 1999, en términos absolutos, el número de hondureños analfabetos ha aumentado sobre el mismo período, al llegar a unos 648,065 adultos que no gozaban para ese año del derecho a la alfabetización (DGEC: EPHPM, 1991 y 1999).

- Los Estados firmantes del Pacto Internacional también deben asegurar el derecho de toda persona a gozar del progreso científico. Sin embargo, a nivel nacional, el 34 % de la población todavía no tiene electricidad en casa, porcentaje que se traduce en que 2,017,496 de hondureños carecen de ella (DGEC: EPHPM, 1999).

Sobre los derechos humanos, en general, y los DESC, en particular, se ha desarrollado un consenso internacional entre la Organización de las Naciones Unidas y los sistemas regionales, como la Organización de Estados Americanos, formalizado en varios convenios y tratados de derecho internacional durante los últimos cincuenta años. Como signatario del Pacto de San José, Honduras ha aceptado la competencia de la Corte y la Comisión Interamericana de Justicia. Durante los años 2000 y 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió declarar admisibles (al estudio de la cuestión de fondo) los casos de Don Alfredo López Alávarez (3 de diciembre de 2001) - referente a irregularidades en el procedimiento judicial por posesión y tráfico de estupefacientes de un reconocido dirigente garífuna - y Don. Ernst Otto Stalinski (3 de octubre de 2000) - relativo a presuntas irregularidades en el proceso judicial de los presuntos responsables de tentativa de secuestro del peticionario.

Durante el 2002 se ha incrementado notablemente el número de casos acontecidos en Honduras y

declarados admisibles por la Comisión:

- Caso 12.331: Marco Antonio, Servellón García, Rony Alexis Betancourt Hernández, Diómenes Obed García y Orlando Alvarez Ríos. “Los Cuatro Puntos Cardinales” de 27 de febrero de 2002: posible responsabilidad del Estado de Honduras por la detención ilegal, tortura y posterior asesinato de dos menores de edad y dos adultos.

- Petición 11.562: Dixie Miguel Urbina Rosales de 9 de octubre de 2002: posible responsabilidad internacional del Estado de Honduras por las muertes de Dixie Miguel Urbina.

- Caso 11.802: Ramón Hernández Berríos y otros de 27 de febrero de 2002: posible detención ilegal y torturas de menores de edad en la Granja Penal de Comayagua por el jefe de reclusos.

De éstos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito en 1967 y hoy reconocido por más de 140 países, constituye el marco fundamental para el tema de los derechos económicos, sociales y culturales⁴.

Dentro del marco del Pacto Internacional se reconocen tres categorías de derechos humanos (véase el recuadro 5.8). Los derechos económicos incluyen el derecho a trabajar y los derechos laborales y sindicales. Los derechos sociales comprenden el derecho a la seguridad social, los derechos familiares y de la niñez, el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la salud. La última categoría, la de los derechos culturales, incluye el derecho a la educación y el derecho de gozar de la ciencia y de la cultura.

Es necesario destacar aparte dos aspectos más del marco de los derechos económicos, sociales y culturales de suma importancia. Según el principio fundamental de los derechos humanos -la igualdad en dignidad de todo ser humano-, los derechos humanos siempre hay que garantizarlos de manera igualitaria para todos. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aparece, en los primeros artículos, el reconocimiento especial del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho a la no-discriminación.

Las obligaciones estatales respecto a los derechos económicos, sociales y culturales

Sin duda, ningún país puede encargarse de proveer del erario, a todos sus habitantes vivienda, alimentación, educación completa, todos los servicios de salud y los demás bienes relacionados con los DESC. Es obvio, también, que un país como Honduras encuentra límites de recursos, que restringen las posibilidades de poder cumplir con los derechos de sus habitantes.

Los derechos a salud, vivienda, alimentación, seguridad social, entre otros, se entienden como derechos abstractos. El Estado no está obligado necesariamente a proporcionar directamente los bienes relacionados con estos derechos a sus habi-

RECUADRO 5.8

Derechos reconocidos en el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales

ECONOMICOS

Derecho a trabajar

Debe promoverse por la orientación y formación técnico-profesional y políticas para asegurar el empleo pleno y productivo. (Artículo 6)

Derechos de los trabajadores

El derecho a “condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias” que incluye salario igual por trabajo igual, condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias, la seguridad y la higiene en el trabajo, igual oportunidad de ser promovidos y descanso razonable. (Artículo 7) El derecho a formar sindicatos y el derecho de huelga (Artículo 8).

SOCIALES

Derecho a la seguridad social

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social” (Artículo 9).

Derechos familiares y de la niñez

El derecho al libre matrimonio, protección para madres antes y después del parto, medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, especialmente contra la explotación y prohibición del empleo de mano de obra infantil (Artículo 10).

Derecho a las necesidades básicas

El derecho “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” (Artículo 11).

Derecho a la salud

Se entiende “salud física y mental.” Incluye: “La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad” (Artículo 12).

CULTURALES

Derecho a la educación

La enseñanza primaria obligatoria y accesible asequible, y gratis; la enseñanza secundaria, generalizada y accesible (y la implantación progresiva de la enseñanza gratuita); la enseñanza superior igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno; y la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria. (Artículos 13 y 14).

Derecho a gozar de la ciencia y la cultura

El derecho a “Participar en la vida cultural; Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; y Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” (Artículo 15)

Fuente: ACNUR, 2002.

tantes, pero sí tiene la obligación de tomar acciones concretas para promover su satisfacción. Entre ellas, el promover la conciencia de estos derechos, reconocerlos en las leyes del país y crear instituciones de monitoreo y defensa de los derechos humanos. Otro deber clave es el de ejecutar políticas que proporcionen un entorno económico y social propicio para la mayor realización de estos derechos entre la población y, especialmente, en beneficio de los más desfavorecidos (PNUD, 2000b).

Calificar a los bienes sociales como derechos y no sólo como metas significa que existen deberes correspondientes de respetar, proteger y cumplir por parte de otros actores. Para el Estado, *respetar* los

derechos significa abstenerse de impedir o limitar las capacidades de la gente de disfrutarlos, incluso por la discriminación. La obligación de *proteger* implica adoptar leyes y otras medidas para impedir que terceros violen los derechos humanos y para combatir las principales amenazas a ellos, especialmente para proteger a los grupos vulnerables. *Cumplir* los derechos humanos implica adoptar medidas positivas que faciliten y ayuden a la gente a disfrutar de sus derechos, por ejemplo, crear la infraestructura necesaria y desarrollar y ejecutar una política coherente para lograr la satisfacción universal de los derechos.

No sólo el Estado tiene el deber de respetar y apoyar los derechos humanos, también lo tienen otros

actores. Las organizaciones de la sociedad civil deben promover la conciencia de los derechos económicos, sociales y culturales y luchar por su cumplimiento. Los ciudadanos tienen que demandar que el Estado respete, proteja y cumpla sus derechos y debe quejarse a las autoridades indicadas cuando son violados por terceros. Además, algunos de los deberes de las personas están formalizados en las leyes, como el de pagar los impuestos, respetar los derechos laborales y mandar a los hijos a la escuela. Se hace más difícil para el Estado cumplir los derechos, si la ciudadanía no respeta ni cumple sus responsabilidades tales como el pago de los tributos.

El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales

Las primeras protecciones constitucionales de los derechos económicos, sociales y culturales en Honduras se encuentran en la Constitución de 1936, en la que, por primera vez, el Estado reconoció como deberes suyos el proveer la protección de los menores y de la maternidad, así como de velar por la salud pública (Cárcamo, 1997).

La gran influencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 impulsó un mayor reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en todo el continente americano (Cárcamo, 1997). Esta tendencia también provocó iniciativas en Honduras, cuya Constitución de 1957 amplió de manera importante el reconocimiento de los derechos familiares y de la niñez y los derechos laborales, dedicando más de cincuenta artículos a definirlos, reconociendo que también el derecho a la seguridad social.

Sin embargo, estos derechos fueron ampliados por la ratificación de la actual Constitución de la República de 1982, que otorga un amplio rango de derechos económicos, sociales y culturales a los ciudadanos. En el plano de los derechos económicos, se menciona el derecho a un salario mínimo, a la formación técnica-profesional pública y a los derechos sindicales. En cuanto a los derechos sociales, la Constitución compromete al Estado en proteger el medio ambiente, en ejecutar programas de vivienda y nutrición y en proporcionar a los niños las condiciones necesarias para un desarrollo sano, entre otras obligaciones. Respecto a los derechos culturales, el Estado se ve comprometido a proporcionar la educación básica gratuita y obligatoria, a combatir el analfabetismo, a desarrollar la educación extraescolar y a proteger la libertad de investigación, de aprendizaje y de cátedra, para mencionar sólo unos ejemplos. También en la Constitución se establece el principio de la no-discriminación al reconocer que todos y todas tienen derechos (véase el recuadro 5.1).

La nueva constitución del país presenta así un entorno jurídico favorable para el progreso de los DESC al reconocer un amplio número de estos derechos y proveer una vía para la incorporación de otros por la ratificación de instrumentos inter-

nacionales. Honduras ha ratificado varios de los nuevos pactos y convenios internacionales que refuerzan y amplían el reconocimiento y las garantías constitucionales de los derechos económicos, sociales y culturales.

Hay que resaltar que aunque los instrumentos de derechos humanos fueron adoptados por las Naciones Unidas antes del 1980, casi la totalidad de las firmas y ratificaciones hondureñas tuvieron lugar después de esa fecha. Este hecho indica claramente el aumento de la preocupación del Estado hondureño por los derechos humanos después del retorno democrático, aunque debe señalarse que todavía existen varios instrumentos importantes que aún no han sido ratificados (véase el cuadro 5.2).

Es especialmente preocupante que el Protocolo de San Salvador -el instrumento fundamental de la Organización de Estados Americanos con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales- a pesar de estar suscrito por Honduras en 1988, todavía no ha sido ratificado. A nivel de los convenios de las Naciones Unidas, faltan firmar y ratificar tres convenios importantes para los DESC. Uno de ellos es la Convención de los Trabajadores Migratorios, de gran relevancia para un país como Honduras que, según datos de la Cancillería recogidos por la oficina hondureña de la OIM, cuenta con unos 650,000 de sus ciudadanos en el exterior, equivalente al 10% de la población nacional.

El derecho a la equidad es especialmente precario por la falta de ratificación de dos instrumentos importantes. Aunque Honduras ratificó en 1983 la Convención de la Mujer, todavía falta acceder a su protocolo facultativo, que creará una vía legal por medio de la que las hondureñas podrían acudir cuando sus derechos humanos no sean cumplidos por el Estado. Es notable la no-ratificación del Convenio contra la Discriminación Racial, adoptado por las Naciones Unidas hace casi cuarenta años, que sería sumamente útil para reforzar y definir la garantía constitucional del derecho a la igualdad.

Ratificar un convenio internacional o una garantía constitucional es un paso importante, pero no significa necesariamente que se vaya a ejecutar. Por ejemplo, si bien el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue ratificado en 1981, el Estado hondureño no cumplió con la responsabilidad consecuente de entregar ante el Consejo Económico y Social su informe inicial sino hasta diecisiete años después.

A partir de la historia reciente de los instrumentos internacionales de derechos humanos en Honduras, se puede ver que se ha establecido desde 1981 la práctica cada vez más normativa de validar en la ley interna los derechos humanos internacionalmente reconocidos. No es una mera coincidencia que esta ola de ratificaciones coincida con el surgimiento de la sociedad civil en Honduras, sino una consecuencia de los esfuerzos de las organizaciones civiles y la exigencia pública para que los gobernantes democráticos respetasen los dere-

CUADRO 5.2

Estatus de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos

Pacto o Convenio (ONU)	Eco-Soc- Cults.	Civiles- Políticos	Estatus
Convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965)	X	X	NO
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966)	X		Ratificado 1981
Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966)		X	Ratificado 1997
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos		X	Firmado 1966
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos (1989).		X	Firmado 1990
Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979)	X	X	Ratificado 1983
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres	X	X	NO
Convenio contra la tortura y otras tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984)		X	Accedido 1996
Convenio sobre los derechos del niño (1989)	X	X	Ratificado 1990
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados		X	NO
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía	X	X	Accedido 2002
C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (1989)	X	X	Ratificado 1995*
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990)	X	X	NO

Fuente: Elaboración propia con base en ACNUDH, 2002 y OIT, 2002.

chos humanos. Sin embargo, parece que la demanda ciudadana para la ratificación nacional de estos convenios todavía no ha sido suficiente para todos los casos.

La internalización de los derechos humanos y los valores democráticos

Hay que reconocer que en los últimos años se han producido efectos positivos para el reconocimiento y afianzamiento de los derechos humanos y la democracia en Honduras, derivados, en gran parte, de la labor realizada por los organismos de derechos humanos. No obstante, en la actualidad, se manifiesta una preocupación importante respecto a la acogida institucional de los derechos humanos, a su efectiva vigencia práctica y a su

internalización en la conciencia de los hondureños.

Por tanto, “la mera formulación escrita de normas jurídicas en el orden normativo no es equivalente a derecho positivo; un derecho es positivo cuando rige, cuando funciona, cuando se aplica, cuando es eficaz” (Bidart Campos, 1991: 110). En ese sentido, “el “derecho” de los derechos humanos no será derecho positivo hasta tanto obtenga vigencia sociológica, es decir, eficacia actual...” (Bidart Campos, 1991: 111).

La evolución de los derechos humanos en Honduras, en el sentido de avanzar hacia su efectivo afianzamiento, reconoce la vigencia normativa e institucional de los derechos humanos, pero existe una valoración social que es ajena a lo que podría entenderse como cultura de los derechos humanos. Esto, lógicamente, tiene que ver con la vigen-

CUADRO 5.2 *continuación*

Pacto o Convenio (OEA)	Eco-Soc- Cults.	Civiles, Políticos	Estatus
Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (1969)		X	Ratificada 1977
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales "Protocolo de San Salvador" (1988)	X		Suscrito 1988
Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores (1984)	X		Firmada 1986
Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1985)		X	Firmada 1986
Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias (1989)	X		NO
Convención interamericana sobre restitución internacional de menores (1989)	X		NO
Protocolo a la convención Americana sobre derechos humanos relativo a la abolición de la pena de muerte (1990)		X	NO*
Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas (1994)		X	Suscrita 1994
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994)	X	X	1995d
Convención Interamericana contra la Corrupción	X	X	Ratificada 1998
Convención interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad (1999)	X	X	NO

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras; 2002 y OEA 2002.

cia sociológica y la representación social de los derechos humanos en Honduras.

Se ha investigado, de manera cualitativa, las percepciones y opiniones sobre los derechos humanos en Honduras a través de un estudio con entrevistas y discusiones de varios actores en la sociedad hondureña. Para poder dar cuenta de la vigencia sociológica de los derechos humanos en el país y de su representación social, se ha aproximado, por un lado, a los actores institucionales claves (organismos no gubernamentales, instituciones de gobierno y medios de comunicación) que con su acción intervienen en el campo de los derechos humanos y, por otro, también se ha acercado a un sector específico de la población, concretamente a estudiantes universitarios. El propósito de este doble acercamiento consiste en conocer cuál es la representación social que los actores consultados tienen sobre los derechos humanos en Honduras. De esta forma, se hace posible contrastar la vigencia normativa e institucional de los derechos humanos con su representación social.

De los discursos obtenidos, cabe destacar como principal consideración la relevancia de su diagnóstico, en tanto que permite conocer las diferentes valo-

raciones discursivas que se manifiestan en cada uno de los sectores considerados en este estudio, a su vez, permiten aproximarse a una visión de conjunto sobre la representación social de los derechos humanos y conocer mejor hasta qué punto *el ethos* de los derechos humanos han tenido introspección como un valor dentro de la democracia hondureña.

Percepciones sobre la evolución y el reconocimiento de los derechos humanos

“Hace 20 años aquí en Honduras nadie se atrevía hablar de derechos humanos, de derechos ciudadanos, de participación ciudadana, nadie, porque se tenía un pavor espantoso a la reacción del Estado [...], ése es uno de los logros que más bien están utilizando de una forma exabrupta, la temática de los derechos humanos. Pero es importante para nosotros poner en el debate de discusión el problema de los derechos humanos; la palabra derechos humanos era una palabra temida, cuando a nosotros nos decían que éramos defensores de los derechos humanos era como si nos dijeran son matones y hay que matarlos, y ante esa crisis y en esa época vivimos y sobrevivimos” (Repr. ONG de

DDHH).

La conquista por el reconocimiento de los derechos humanos en Honduras, obviamente, marca un avance significativo, en esto coinciden los diferentes actores institucionales. El hecho de haber creado el Comisionado de Derechos Humanos en 1992 representa una expresión de voluntad política estatal para someterse a control: “hubieran pasado cincuenta años y el Estado no hubiera reconocido, pero vino el Comisionado y hubo un reconocimiento tácito de las violaciones, de que fue un Estado violador de los derechos humanos” (Repr. ONG de DDHH).

Hoy se habla con mucha libertad de derechos humanos en las escuelas de primaria, en las escuelas de secundaria, en las universidades; eso era un tema prohibido hace 15 o 20 años atrás. Ese es un paso en materia de cultura política fundamental, en materia de derechos humanos.

El Estado, la institucionalización y la vigencia práctica

Si bien es cierto que se ha logrado un reconocimiento y una acogida institucional de los derechos humanos, esto no significa que se haya producido una consecutiva vigencia práctica de ellos. Aquí radica una de las principales críticas que los organismos no gubernamentales de derechos humanos hacen frente a la concepción estatal en materia de derechos humanos.

El argumento consiste en que desde el Estado se habla de derechos humanos en cuanto discurso que asume su reconocimiento, es decir, que el Estado los reconoce en su aspecto formal, pero en su vigencia sociológica aún no existe una coherencia entre lo que podría denominarse teoría y práctica de los derechos humanos. “El Estado tiene un discurso de derechos humanos, pero no tiene una política institucional en materia de derechos humanos [...]. Hay una preocupación manifiesta, la policía ha integrado, incluso, el tema de derechos humanos a su discurso, pero no así en la práctica” (Repr. ONG de DDHH).

Hay una diferencia muy marcada en los planteamientos de ambos sectores, por ejemplo, en el caso de la seguridad, es un deber del Estado proveerla a los ciudadanos. Pero desde el punto de vista de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, el Estado lo hace con una visión marcadamente policial. Consideran que el enfoque debe ser más integral, no vertical desde la Secretaría de Seguridad. En eso hay no sólo una diferencia conceptual, sino una diferencia filosófica de los derechos humanos.

También en el sentido práctico hay diferencias, pues el Estado tiene una visión más represiva de los derechos, es decir, los admite, pero los mira como una concesión del Estado que debe ser objeto de regulaciones adicionales. Esto marca también una diferencia. “Hay un discurso muy bien manejado por el Estado de respeto a los derechos huma-

nos [...]. Ahora, en la práctica es distinto, pues eso siempre se dice, el hecho de que las cárceles estén llenas de gente [...], el hecho de que el Estado no se preocupe plenamente para resolver el asunto de los maestros, mientras los niños y las niñas no sigan recibiendo educación plena, el hecho de que los hospitales se vayan a huelga y que las mujeres tengan que parir en las calles y que no hayan medicamentos; esos son problemas que hay que abordarlos con profundidad y desde el Estado. Aunque el tema de derechos humanos, ellos sólo lo enfocan desde el término policiaco o militar [...], creo que el Estado, desde su discurso, sólo lo maneja desde su ámbito de policías y militares” (Repr. ONG de DDHH).

El criterio acerca de la inexistencia de una política institucional en materia de derechos humanos por parte del Estado, es compartido incluso, desde una de las instancias de gobierno que intervienen en materia de derechos humanos: “Si usted le llama institucionalización a lo que podría ser la creación de algunas instancias donde descansan, la promoción de los derechos humanos, ha habido una institucionalidad, pero un principio, no una línea política, una línea trazada, no”. En ese mismo sentido, y refiriéndose a la vigencia de los derechos humanos, señala que, “en el sector justicia no podría decirse que hay una garantía de derechos humanos, es más, creo que ahí descansa una de las grandes debilidades de poner en vigencia o ganar una eficacia de los derechos humanos. Precisamente por la posibilidad de la impartición de justicia” (Repr. CSJ).

Existe cierto grado de voluntad de luchar por los derechos humanos

Es importante señalar que, si bien no existe una coherencia explícita entre el discurso y la práctica de los derechos humanos, esto no significa que no haya una disposición institucional por afianzar el respeto y el goce de los derechos humanos. Sin embargo, hay que aclarar que, por un lado, desde la visión de los representantes de instituciones del Estado que fueron consultados, dicha disposición no se visualiza en cuanto política pública integral del Estado, sino en cuanto voluntad personal de quienes están al frente de las instituciones públicas para hacer efectivo el marco jurídico que regula el comportamiento institucional en materia de derechos humanos. Esto se observa en las apreciaciones siguientes:

“No me tocaría a mí decir si hay una voluntad política, puedo hablar de una voluntad, pero creo que esta voluntad política sólo se puede medir a través de resultados” (Repr. CSJ).

“Si de repente alguien, algún miembro de la institución viola esas normas o esas disposiciones, es acreedor individualmente de la responsabilidad que eso le atañe, es decir, que si alguna persona en el ejercicio de sus funciones abusa de su autoridad, llega a violar precisamente lo que es la esencia de

los derechos humanos, esa persona tiene que hacerse acreedora como funcionario individualmente de sus actuaciones, porque al cometer las violaciones no lo hace siguiendo ninguna política institucional, porque la política institucional es la que ya enmarca la ley y lo que se especifica como parte de nuestra misión...” (Repr. Policía Nacional).

Por otra parte, y desde la perspectiva de los actores de sociedad civil que intervienen en materia de derechos humanos, se sostiene que a nivel de Estado hay una voluntad, pero no una práctica manifiesta. Hay instituciones del Estado que tienen una visión clara de los derechos humanos, pero, también, hay sectores en los que aún prevalecen vestigios autoritarios que frenan la voluntad política del Estado en materia de derechos humanos.

“...hay como una preocupación pero no hay una decisión, nosotros hemos estado trabajando con la libertad de prensa y he llegado a una conclusión que un gobierno o cualquier gobierno que sea, que trate de restringir, de manipular o controlar la libertad de prensa, nos está violando un derecho fundamental a ser informado, y ese gobierno, por lo tanto, sería un gobierno violador. Para poder construir, para poder hacer, entonces, es lo que le dije antes, tal vez en teoría, pero en la práctica hay mucho que caminar, y no es suficiente que se haya creado un Comisionado, no es suficiente que se haya creado un Ministerio Público, no es suficiente que en los diferentes ministerios haya encargados sobre la problemática de derechos humanos, lo bueno es practicarlo no teorizarlo para justificarlo” (Repr. ONG de DDHH).

“Disposición, yo creo que sí existe disposición, o sea, hay instituciones dentro del Estado que tienen una visión clara de los derechos humanos, el propio Comisionado que es parte del Estado tiene una visión, digamos, coherente con lo que piensa la sociedad civil de los derechos humanos. Y creo que eso expresa una voluntad. El que una institución del Estado como las Fuerzas Armadas se someta a un proceso de modernización expresa una voluntad por parte de una institución del Estado. Por supuesto que hay otros obstáculos, por ejemplo, las tradicionales relaciones entre ciertos sectores privados y ciertos sectores de la policía y ciertos sectores del ejército, no son coherentes con la voluntad política. O sea, siempre hay como unos contrapesos o contracorrientes que pueden en algún momento obstaculizar, tal vez no revertir, la voluntad del Estado para cumplir con los derechos humanos” (comunicador social).

Lo anterior, obviamente, es una manifestación de la endeble acogida institucional de los derechos humanos en Honduras, ya que, puede decirse que, los derechos humanos aún no han sido “tomados en serio” por parte del Estado. En ese sentido, frente al discurso de los derechos humanos como reconocimiento y frente al discurso de la demanda por la vigencia práctica de los mismos, el problema de fondo que subyace, es de carácter político, pues, tal como lo ha expresado Norberto Bobbio, refiriéndose al reto actual de los derechos humanos, “ahora

no se trata de buscar otras razones [...], sino de poner las soluciones para una más amplia y escrupulosa realización de los derechos proclamados [...] El problema de fondo relativo a los derechos humanos no es hoy tanto el de justificarlos como el de protegerlos. Es un problema no filosófico, sino político” (Bobbio, 1991: 61).

La ciudadanía y los derechos humanos

A nivel de los actores institucionales que intervienen en materia de derechos humanos se destacan dos posiciones referentes a la valoración que la población tiene sobre los derechos humanos. Por un lado, algunos actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, consideran que sí existe en la población una percepción clara sobre lo que son los derechos humanos. “Hoy, la sociedad ya tiene la percepción clara de lo que es la temática y problemática de lo que son los derechos humanos, que no sólo es el derecho a capacitación, tiene derecho a educación, tiene derecho a salud, tiene derecho a vivienda, [...] además, conoce y tiene la percepción ya clara, conoce sus derechos” (Repr. ONG de DDHH).

“En Honduras la gente todavía no hace una diferencia de las generaciones de derechos como han sido clasificados por el sistema interamericano y el sistema de las Naciones Unidas, pero tiene claro que el trabajo es un derecho, tiene claro que la salud es un derecho, que la educación es un derecho, que la participación es un derecho, tiene claro que votar, que elegir es un derecho. Lo tiene claro” (comunicador social).

Por otra parte, están los actores institucionales que consideran lo contrario, es decir, que aún no existe una claridad por parte de la población sobre los derechos humanos. Esto se observa en las siguientes apreciaciones:

“Pienso que los conceptos los tienen un tanto confundidos porque casi siempre el defender o querer manejar el término de los derechos humanos lo van a asociar siempre a los organismos de derechos humanos, porque es hacia ellos que va el cuestionamiento” (Repr. Policía Nacional).

“Es una población que no tiene educación en derechos humanos, si es que ni los universitarios tienen claridad de lo que es derechos humanos, qué vamos a esperar de la población que llegó a tercer grado o de aquéllos que nunca fueron a la escuela, es decir, hay un problema serio desde la misma academia sobre la concepción de los derechos humanos, entonces de la población no esperemos mucho” (Repr. ONG de DDHH).

Los derechos humanos como “defensores de delincuentes”

Uno de los principales discursos que surge de los grupos de discusión con estudiantes universitarios es el que refuerza el estereotipo de los derechos humanos como “defensores de delincuentes”.

Al respecto, cabe aclarar que, en primer lugar, hay un grupo de estudiantes que confunden derechos humanos con organismos de derechos humanos y condensan en una sola figura concepto y organización, dando así, lugar a la identificación siguiente: derechos humanos = organismo de derechos humanos. Ello se refleja en la siguiente valoración discursiva: “Que los busquen y que se acojan a ellos para que vean de qué manera se les puede ayudar. Porque eso es lo que sucede, porque hay muchas personas que desconocen que los derechos humanos existen y que ellos, aún siendo lo que sean, ellos pueden acudir” (Grupo de discusión 1).

En segundo lugar, este mismo grupo de estudiantes identifica organismo de derechos humanos como sinónimo de “defensor de delincuentes”. Entonces, la relación final queda estructurada de la siguiente forma: derechos humanos = organismo de derechos humanos = “defensores de delincuentes”. La expresión más clara de ello es la siguiente: “En vez de liberar que investiguen, porque como decían, un delincuente comete un delito se va a refugiar en ellos. Entonces que lo investiguen, que si en realidad es un delincuente, que no lo protejan, pues” (Grupo de discusión 1).

Sin embargo, hay otro grupo de estudiantes que sí diferencia entre derechos humanos y organismos de derechos humanos. Además, tienen mayor claridad respecto a la labor que realizan los organismos de derechos humanos en materia de defensa, una percepción reflejada en la forma siguiente: “Sí, es cierto. Los defienden en el aspecto de sus derechos humanos. No es que están defendiendo delincuentes, porque robaste, mataste y violaste, entonces, yo te defiendo, no. Los están defendiendo porque íntegramente han abusado de ellos” (Grupo de discusión 2).

El estereotipo de los “derechos humanos como defensores de delincuentes”, tiene que ver con la vigilancia que hacen los organismos de derechos humanos sobre los procedimientos policiales y judiciales, principalmente en el tratamiento a menores, en tanto que éstos son sujetos de derechos y de tratamientos judiciales especiales. Al respecto, cuando un menor comete un delito y las autoridades encargadas de administrar justicia no respetan las leyes y procedimientos especiales que regulan el trato a menores, los organismos de defensa de los derechos humanos abogan y demandan por el cumplimiento y respeto de dichas leyes y procedimientos.

El efecto social de esta labor ha tenido consecuencias negativas para los organismos de derechos humanos, puesto que aún, en las instituciones públicas (principalmente de policía), quedan vestigios autoritarios de la herencia política de décadas anteriores y, por tanto, el trabajo que realizan estos organismos discrepa con dicha herencia. A tal grado que, desde los medios de comunicación, se difunde información de desprestigio en su contra, generando, en gran parte de la población, una visión estereotipada hacia los organismos de dere-

chos humanos como “defensores de los delincuentes”.

Evidentemente, un sector de la población ha sido permeable a cierta campaña que nació de la policía hondureña, asociando a los organismos de los derechos humanos con defensa de delincuentes. Esta campaña que surgió a principios de los noventa, en el seno de la policía, influyó mucho en la gente. Y asocia, aún ahora, a los organismos de derechos humanos como defensores de pandilleros, defensores de delincuentes en general. Pero otro sector importante de la población también piensa que son organismos necesarios para la sociedad, que fueron contrapeso de un Estado impune y que pueden ser contrapeso hoy de un Estado falto de transparencia.

Los actores institucionales que intervienen en el campo de los derechos humanos no desconocen esta situación, ya que, efectivamente, son conscientes del estereotipo que la población tiene sobre los derechos humanos. Consideran, además, que los medios de comunicación, han sido, en gran medida (sea como producto del desconocimiento en materia de derechos humanos, sea como producto de una intencionalidad preconcebida), responsables directos e indirectos de difundir y afianzar el estereotipo de “defensores de delincuentes”.

“Eso es producto de una campaña de los medios de comunicación como defensores de los delincuentes, es parte de un proceso de ignorancia profunda a todos los niveles, es decir, a todos los niveles hay un enorme desconocimiento en derechos humanos. Entonces, la gente juzga a los organismos de derechos humanos como defensores de delincuentes” (Repr. ONG de DDHH).

“En muchos casos ha habido una intencionalidad, sí, definitivamente, porque los medios que en el pasado guardaron un prejuicio hacia los organismos de derechos humanos por tildarlos de defensores de comunistas, por ser defensores de los opositores políticos, por golpear fuerte a clientes de los medios en el campo estatal; esos prejuicios, estos medios los arrastran hasta ahora. Y creo que se sienten coherentes con la vieja posición, el contribuir ahora a un proceso de deslegitimación, un proceso de peyoración de las instituciones de derechos humanos” (Comunicador social).

Los derechos humanos como vivencia publicitaria

Otro discurso que sobresale en los grupos de discusión con estudiantes universitarios, es el que identifica los derechos humanos con lo que se publicita sobre ellos, en ese sentido, la valoración resultante es que en Honduras los derechos humanos sólo existen como publicidad, no como vivencia práctica. “Existen, se ven bien bonitos. Existen en papel, en afiches” (Grupo de discusión 1).

“Los derechos humanos sólo se hacen en papeles, sólo usted tiene derecho a esto y a esto, pero

realmente no se mira en la sociedad que la persona tiene derecho y que se los están cumpliendo [...] Entonces, los derechos humanos sólo estén escritos, o tal vez, yo no los miro, o tal vez la sociedad no los mira, pero siempre se violan” (Grupo de discusión 1).

“Los derechos humanos que pregonan en los periódicos o la gente, los organismos internacionales que tienen que ver con esto, son como los más importantes, son de los que nosotros hemos carecido” (Grupo de discusión 2).

Este segundo acercamiento al discurso de los estudiantes indica que, independientemente de la conceptualización acerca de los derechos humanos, en el fondo, el problema que subyace es de vivencia de tales derechos. En efecto, existe un problema de conceptualización por parte de los estudiantes, sin embargo, la brecha entre los derechos humanos que se publicitan y lo que se vive es enorme. En ese sentido, para que la sociedad experimente los derechos humanos como derecho vivido, no presupone, necesariamente, una conceptualización previa de los mismos por parte de la población, lo fundamental es la garantía de que éstos sean respetados por parte de quien los tutela, es decir, por parte del Estado.

Los derechos humanos como privilegio de clase

Otro discurso recurrente en los grupos de discusión es el que identifica los derechos humanos como un privilegio de clase social, una percepción que indica una relación directa entre vivencia de los derechos humanos y su percepción. En este caso, la posición de clase condiciona los derechos humanos en cuanto derecho vivido y en consecuencia la percepción que se tiene sobre ellos. Por lo tanto, desde la perspectiva de los estudiantes, los pobres no tienen derechos humanos. En ese sentido, se refuerza entonces el discurso de los derechos humanos como privilegio de clase social.

“Los derechos humanos es el derecho de cada persona, pero realmente en nuestra sociedad casi no se ha visto porque tienen más privilegios las personas que tienen dinero porque, tal vez, se secuestra a un rico, lo andan buscando con todo, hasta con el ejército, mientras que con un pobre, no tienen [...] Entonces, eso es lo que afecta a la sociedad, el tipo de criterio entre las personas que son más acomodadas que las personas pobres” (Grupo de discusión 2).

“No hay equidad en los derechos. La persona que tiene más dinero es la que puede pelear, hay casos que, en la cárcel hay personas que tal vez han fallado en robarse una gallina o algo, y todavía no se les ha hecho juicio, por qué, porque no tienen dinero” (Grupo de discusión 1).

“Se supone que todos tenemos derechos. No sólo los ricos, digamos, sino que también los pobres. Todos tenemos derechos por igual y, a veces, eso no se toma en cuenta, porque, digamos, en los

hospitales se da eso que sólo porque tiene dinero la persona, tiene alta posición; no digamos en clínicas, sólo porque tienen dinero asisten a ellas y a un pobre yo creo que no lo aceptarían. Sólo por qué, porque no puede pagar la consulta o, digamos, la medicina...” (Grupo de discusión 2).

Los derechos humanos como problema cultural

Frente al discurso de los derechos humanos como problema cultural, puede afirmarse que existe un consenso claro en todos los actores consultados para este estudio, ya que, efectivamente, todos hacen hincapié en que uno de los problemas fundamentales para que se respeten los derechos humanos, parte del conocimiento y de su apropiación por la población, esto supone, el hecho de sentirse sujeto de derechos.

“Esto no es otra cosa que un problema cultural. La cultura de nosotros incide de tal forma que ni nosotros mismos sabemos cuáles son nuestros derechos. Entonces no los podemos reclamar. Si alguien no conoce que tiene derechos, cómo los va a reclamar, siempre lo van a estar pisoteando” (Grupo de discusión 2).

Después de veinte años de democracia, en Honduras todavía no existe una cultura que propicie el afianzamiento de los derechos humanos, pues efectivamente la cultura, en este caso la cultura de los derechos humanos, no es algo que se construye de la noche a la mañana, al contrario es el resultado de procesos lentos y coherentes entre los derechos proclamados y el derecho vivido. Además, estos procesos resultan más difíciles en sociedades en las que ha prevalecido una cultura autoritaria.

Superar la contradicción entre los derechos proclamados y los derechos vividos

La construcción de la democracia desde hace veinte años representa un cambio sumamente favorable para el progreso de los derechos humanos en Honduras que ya ha proporcionado muchos frutos. Una serie de seis elecciones regulares ha creado nuevas oportunidades por la ciudadanía de influir en su gobierno para respetar, proteger y cumplir sus derechos. Sobre esta base, y a través de la constitución, leyes, instituciones, pactos y convenios internacionales, se ha construido impresionantes avances en el reconocimiento jurídico de los derechos humanos, en general, y de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, en particular.

Sin embargo, se puede destacar dos zonas de sombras que afectan la consolidación de los derechos humanos en el país. Primero, hay una falta de coherencia entre el marco institucional-legal y la aplicación e implementación de las leyes e instituciones de derechos humanos existentes y, segundo, todavía no se ha logrado involucrar los dere-

chos humanos como un valor sólido dentro de la democracia hondureña.

Es cierto que existen leyes e instituciones creadas para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos en el país, y también hay actores fuertes de la sociedad civil luchando por la misma causa. Los instrumentos legales y las prácticas institucionales orientados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos son una medida clave de construir un estado de seguridad humana, y con una mayor seguridad se puede avanzar más fácilmente en el desarrollo humano.

La vinculación entre el desarrollo humano y la democracia desde una perspectiva de derechos humanos permite la identificación de nuevos horizontes de medidas e intervenciones integrales. En lugar de buscar solucionar los sistemáticos problemas económicos y sociales por medio de medidas reactivas y desarticuladas, una propuesta de desarrollo basada en los derechos busca la institucionalización de prácticas y normas que amparen a los ciudadanos contra situaciones de vulnerabilidad.

Cuando los derechos económicos, sociales y culturales se reconocen como tales, los pobres dejan de ser “beneficiarios” pasivos del desarrollo y se vuelven participantes activos, con derecho a la consulta, a la participación y a la responsabilidad del gobierno. Este empoderamiento conduce a una nueva ética ciudadana en que la relación entre el pueblo y el gobierno no trata de pedir ayuda a los políticos desde una situación de vulnerabilidad sino desde una dinámica en que la ciudadanía pueda exigir que el Estado cumpla con sus deberes sin que esto sea visto como un favor político. Es decir, un escenario en que las prestaciones de servicios públicos desde el Estado sea asimilada por la gente como satisfacción de sus derechos fundamentales.

Sin embargo, lograr la mayor seguridad de los derechos económicos, sociales y culturales en Honduras significará consumir tareas pendientes en materia de reconocimiento y de institucionalización. La ratificación de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos es un paso impostergable para avanzar los DESC en Honduras y debería ser un objetivo principal para los próximos años. En el aspecto de la institucionalización, el desafío sobresaliente ahora es el de fortalecer la capacidad de estas instituciones de cumplir con sus tareas, proporcionándoles los recursos y las capacidades necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Al analizar los derechos humanos, tanto en el ámbito de su vigencia sociológica, como en el de su representación social, significa, por un lado, que se tiene que tomar en cuenta los factores estructurales de exclusión social que impiden el acceso y disfrute de los derechos humanos (principalmente los sociales y económicos) a la mayoría de hondureños y, por otro lado, que es necesario analizar el proceso de configuración histórica del autoritarismo, puesto que ha generado unas relaciones de

poder y de convivencia (sociales, culturales, políticas y económicas) autoritarias.

El poder de las organizaciones de derechos humanos está en capacidad de movilizar la población electoral en apoyo de sus esfuerzos. No es suficiente que una demanda ciudadana exista en el nivel organizado si no existe también en la base, especialmente a la hora de elegir representantes. Un desafío para las organizaciones de derechos humanos en los próximos años será trabajar para lograr esta movilización de base por los derechos económicos, sociales y culturales que implica un proceso de educación ciudadana.

Todavía, después de veinte años de democracia, según un entrevistado, hablar de los derechos humanos en Honduras significa “hablar de un tema todavía doloroso, no para los que estuvieron o están acostumbrados, o como algunos que escuchamos el dolor de la madre que le mataron a su hijo en la esquina, o el ruido de una metrallera, sino que significa, para la gente que estamos conscientes de los derechos humanos, la tristeza de vivir en un país donde no se comprende o no se quiere entender, o donde la población ni siquiera tiene la facultad porque se le ha borrado, se le ha triturado esa idea de los derechos humanos, de que tienen derechos como personas. Vivir en un país donde la gente está conforme de levantarse, acostarse y morir, de vivir en un país donde los derechos de la niñez, de las mujeres, de los más vulnerables, siguen derrotados” (Repr. ONG de DDHH).

De cara a esta realidad, un gran reto actual para el afianzamiento de los derechos humanos en Honduras, continúa siendo la necesidad de trascender de la vigencia normativa de los derechos humanos a su vigencia sociológica, es decir, traducir los derechos proclamados en derechos vividos. Esto obliga a un el irrestricto y efectivo desarrollo de la democracia en su manifestación plena, lo que, traducido en materia de derechos humanos, significa la garantía del disfrute universal de todos los derechos humanos. Para los políticos y funcionarios del gobierno, el desafío será escuchar y responder a esta demanda ciudadana y dar la bienvenida a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción y seguimiento de sus políticas.

No obstante los inconvenientes señalados, se observan importantes logros en el reconocimiento e institucionalización de los derechos. Por ejemplo, la nueva Ley contra la Violencia Doméstica y la creación de nuevos mecanismos para que las mujeres agredidas puedan buscar protección -con la policía, en el Ministerio Público o con el Comisionado- han aumentado la conciencia de las mujeres de sus derechos y estimulado mayores niveles de denuncias.

El caso del movimiento de mujeres es un ejemplo del ciclo virtuoso que genera el avance de los derechos humanos: la demanda ciudadana estimula un mayor reconocimiento formal y protección legal de los derechos humanos que, a su vez, pro-

picia que la gente perciba sus derechos como tales y reclame cuando éstos son violados, ayudando a la más eficaz protección y satisfacción de los derechos. Los esfuerzos de la sociedad civil y del gobierno para agilizar esta sinergia determinarán hasta qué punto la situación de los derechos económicos, sociales y culturales mejora en los próximos años.

Lógicamente, quedan muchas tareas pendientes

que se deben afrontar en materia de derechos humanos, pero los desafíos principales continúan siendo dos: la conquista, ya no del reconocimiento, sino de la correspondencia efectiva entre derechos proclamados y derechos vividos, y fortalecer y potenciar los valores de derechos humanos en los hondureños y hondureñas para que éstos sean el centro de la democracia y del desarrollo del país.

NOTAS

1 Los 376 fiscales titulares y auxiliares con que cuenta este organismo, con oficinas en la capital y otras ciudades, tienen la responsabilidad de recibir denuncias, autorizar su investigación por la Dirección General de Investigación Criminal y presentar los casos ante un tribunal, cuando existe suficiente evidencia para hacer una acusación.

2 Cabe mencionar la excepción en materia de violencia doméstica, en la que los casos pueden ser denunciados a la Fiscalía de la Mujer o a un fiscal general, aún y cuando el objeto de las denuncias no esté tipificado como delito, como, por ejemplo, en los casos de abuso psicológico.

3 Es importante notar que las actividades laborales que no impiden que los niños estudien, como lo es ayudar en una tienda familiar o con los quehaceres de la casa de tiempo parcial, no se consideran como trabajo infantil.

4 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue ratificado por Honduras en 1981. Muchas de las mismas garantías se pueden encontrar también en instrumentos anteriores, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y posteriores, como el Convenio de la Mujer (1979), el Convenio del Niño (1989) y otros.